

## PONENCIA 1

### PRESENTACIÓN DEL MIDI: NOVEDADES E INCERTEZAS

#### 1. INTRODUCCION.

Con la entrada en vigencia del motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* [MIDI], que reforma el Código de derecho canónico de la Iglesia latina en los cann. 1671-1691, se puede perfectamente hablar de una refundación del proceso matrimonial canónico ágil, accesible y eficaz, que responde máximamente al deseo del legislador de una conversión misionera de la Iglesia y de una promoción de la familia, en línea con los últimos dos sínodos episcopales de la Familia.

A la luz de esa misma «hermenéutica sinodal», que la Iglesia se vuelva hacia sus hijos marcados por el amor herido y perdido, para volver a donarles confianza y esperanza, Francisco le pide a la Iglesia **conversión personal y estructural** en la administración de justicia: “es importante que la nueva normativa sea recibida y profundizada, en el mérito y en el espíritu, especialmente por los operadores de los tribunales eclesiásticos, con el fin de ofrecer un **servicio de justicia y caridad a las familias**”.

#### 2. LÍNEAS MAESTRAS DE LA REFORMA

Antes de entrar en el contenido concreto de la reforma, conviene hacer alguna observación sobre los criterios o líneas maestras orientadoras de la labor del legislador, tal como se deduce de los principales cambios introducidos y como aparecen expuestas en la extensa Introducción del motu proprio, que constituye una exposición de motivos sumamente reveladora del espíritu de la misma.

**2.1. REVALORIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE JUZGAR DEL OBISPO Y DE LA DIMENSIÓN PASTORAL DEL PROCESO:** La reforma plantea, en primer lugar, un importante cambio de perspectiva y espíritu, al reforzar la implicación del Obispo diocesano en la misión de juzgar, recordando su condición de primer juez de la diócesis, y potenciar la dimensión pastoral del proceso canónico de nulidad. En este sentido, es especialmente significativo la Ratio procedendi, cuyo art. 1 recuerda el deber apostólico del Obispo respecto a «los cónyuges separados o divorciados que por su condición de vida hubieran abandonado eventualmente la práctica religiosa». Más allá de la estricta regulación procesal, subyace en esta reforma una llamada a una mayor integración de la pastoral familiar diocesana y de la labor del tribunal eclesiástico, de modo que no actúen de forma paralela o ignorándose mutuamente, sino conjuntamente, como los dos brazos con que cuenta el Obispo para acoger, ayudar y dar respuesta a los fieles que sufren. Es una aportación fundamental de esta reforma haber visibilizado y enfatizado esta intrínseca dimensión pastoral del proceso y del mismo tribunal eclesiástico, recordando al Obispo que su misión no se agota en crear, organizar y sostener el tribunal, sino que, sin perjuicio de la conveniencia de que haya personas especializadas y dedicadas, clérigos o laicos, que puedan cooperar en el ejercicio de esta pastoral judicial, él mismo puede y debe involucrarse más directamente en su actividad, pues el Obispo es el primer juez –el juez nato– de la diócesis. En este sentido, conviene no olvidar que la revalorización del papel del Obispo en las causas de nulidad no se cumple preferentemente por la reserva de algunas causas al Obispo –que será siempre necesariamente algo minoritario– sino que pasa por tomar conciencia de la responsabilidad de éste en la provisión adecuada de los oficios implicados en la pastoral judicial.

**2.2. LA AGILIZACIÓN DE LOS PROCESOS** La agilización de los procesos –que viene siendo una preocupación constante del legislador, de los pastores, y de la misma doctrina canónica– aparece como una de las finalidades expresas de esta reforma procesal, plasmándose en varias de las novedades más significativas introducidas por el motu proprio, entre las que cabe citar, de modo destacado, la supresión de la exigencia de duplex conformis para la declaración de nulidad matrimonial (c. 1679)<sup>19</sup> y el establecimiento de un novedoso proceso abreviado ante el Obispo (cc. 1683-1687).

**2.3. MEJORAR Y GARANTIZAR EL EFECTIVO ACCESO DE LOS FIELES A LOS PROCESOS** Se constata, en esta reforma legal, una clara intención de –en coherencia con lo señalado en el Sínodo extraordinario– facilitar el facilitar el acceso de los fieles a este concreto remedio eclesial de la declaración de nulidad del matrimonio precedente, salvando la verdad y la indisolubilidad del matrimonio. Con este fin, complementario con el de la agilización de las causas, se ponen los medios para garantizar el efectivo acceso de todos los interesados a los tribunales mediante algunas opciones legislativas concretas:

**2.3.1. La ampliación de los fueros competentes** Hay una insistencia grande en el criterio de cercanía entre los fieles y el tribunal, como modo de garantizar el acceso efectivo al órgano judicial. Una novedad significativa es, en este sentido, que –salvando siempre el derecho de defensa de la otra parte– se admita con toda amplitud la posibilidad de pedir la nulidad en la propia diócesis (el fuero del demandante), lo que evita que la parte interesada en pedir la nulidad tenga que acudir a un tribunal lejano para ver resuelto su caso. Es una novedad relevante y que puede contribuir a facilitar el planteamiento de estas causas, si bien su concreta articulación jurídica no está exenta de problemas, como se comentará más adelante.

**2.3.2. Desarrollo de las estructuras pastorales para la investigación prejudicial** También en la línea de facilitar el acceso de los fieles a la petición de la nulidad se sitúa la sugerencia del documento en que se creen en las diócesis, arciprestazgos, etc., estructuras estables de asesoría o de orientación jurídica que puedan ayudar a las personas a orientar su caso y recoger la prueba disponible de modo que, una vez presentada la demanda, el proceso discurra con la mayor rapidez posible (arts. 2-5 de la Ratio procedendi, aplicables a la preparación de cualquier proceso de nulidad, tanto ordinario como abreviado).

**2.3.3. Gratuidad de los procesos** En la misma línea de suprimir los obstáculos que alejan a los fieles de este remedio, el motu proprio insta, en su introducción, a las Conferencias Episcopales a que, salvando la justa y digna retribución de los operadores del tribunal, favorezcan en la medida de lo posible la gratuidad de estos procesos, de modo que la Iglesia se muestre como una madre generosa en una materia tan íntimamente ligada a la salvación de las personas. Se trata de un desideratum reiteradamente expresado por el Pontífice, por lo que habrá que ir caminando hacia ella en la medida de lo posible. Las Conferencias Episcopales corresponderá determinar cómo compaginar esa deseable gratuidad con la situación económicamente precaria de tantas diócesis y con la también exigible –conforme a la doctrina social de la Iglesia– remuneración justa de los operadores del tribunal.

3. ASPECTOS QUE PERMANECEN INALTERADOS EN EL SISTEMA PROCESAL MATRIMONIAL CANÓNICO TRAS LA REFORMA Antes de entrar a analizar las profundas innovaciones procesales que introduce este motu proprio pontificio, conviene también poner de relieve todo aquello que se mantiene inalterado,

a) Se mantiene el carácter declarativo de los procesos de nulidad; las reformas introducidas no buscan anular, disolver matrimonios válidos, sino verificar de modo más rápido y eficaz la realidad del primer matrimonio, discerniendo si fue válido o nulo. «En total sintonía con esos deseos, he decidido establecer con este Motu proprio disposiciones con las cuales se favorezca no la nulidad de los matrimonios, sino la celeridad de los procesos y, no en menor medida, una adecuada simplificación, de modo que, a causa de un retraso en la definición del juicio, el corazón de los fieles que esperan la clarificación del propio estado no quede largamente oprimido por las tinieblas de la duda» (Mitis Iudex, Prefacio).

b) Permanece también la naturaleza judicial del proceso, que salvaguarda más adecuadamente los derechos de las partes, la seguridad jurídica y el descubrimiento de la verdad. La vía judicial resulta más coherente con el carácter declarativo –no constitutivo– del reconocimiento de la nulidad del matrimonio. La reforma mantiene su carácter judicial, porque, como indica la misma norma en su Introducción, es el modo más adecuado para tutelar tanto la verdad del matrimonio como los derechos de los fieles implicados en estas causas.

c) En la misma línea, se mantiene la exigencia de la necesaria intervención del defensor del vínculo en estos procesos, tanto en el ordinario y el documental, como en el novedoso abreviado, precisamente en orden a salvaguardar la objetividad de estos procesos y ahuyentar las dudas sobre la adecuada defensa de la validez del matrimonio. De hecho, la figura del defensor del vínculo queda revalorizada y adquiere especial protagonismo en estos procesos, dada la desaparición de la duplex conformis.

d) Queda salvado el derecho de apelación de partes y del defensor del vínculo si no están de acuerdo con la sentencia recaída en la causa, de modo que pueda otro tribunal revisar lo actuado, evitando de este modo el riesgo de arbitrariedad o el excesivo subjetivismo en la decisión. La posibilidad –nunca obligación– de recurrir contra la sentencia.

e) Permanece asimismo inalterada la regulación del proceso documental, habiendo cambiado únicamente la numeración de los cánones: v.cc.1686-1688 del Código de 1983, y cc.1688-1690, tras la reforma del m.p. Mitis Iudex. Se mantiene así un proceso sumario que permitía la declaración de nulidad de modo especialmente ágil, pero que presenta la importante limitación de no ser aplicable a vicios de consentimiento, incluso aunque estén perfectamente probados por medio de documentos.

f) Respecto a los presupuestos procesales, no se incluye ninguna modificación en la legitimación para la causa, que continúa correspondiendo únicamente a los esposos y, en casos muy concretos, al Promotor de Justicia, salvo en aquellos supuestos excepcionales de solicitud de la declaración de nulidad de un matrimonio disuelto ya por muerte de uno de los esposos.

g) Tampoco hay cambios respecto a la identificación de la acción o la posibilidad de acumulación de las mismas. Así, se mantiene en el c.1676,5 la obligación del ex c.1677,3 de que el dubium especifique por qué capítulo o capítulos concretos se pide la nulidad, evitando de ese modo

fórmulas de dudas amplias e indeterminadas, sobre la validez o nulidad del matrimonio, con la inseguridad jurídica que provocan. Asimismo, la acumulación de acciones podrá producirse tanto en la misma instancia como en las sucesivas, con independencia del grado en que se encuentre la causa, al reproducir el c.1680,4 lo dispuesto en el ex. c.1683, permitiendo a la parte aducir nuevos capítulos de nulidad en grado de apelación, que serán juzgados «como en primera instancia».

h) Se mantiene la referencia a la seria obligación de, antes de aceptar la causa, asegurarse con certeza de que el matrimonio ha fracasado de modo irreparable y de que es imposible restaurar la convivencia conyugal.

i) En relación a la prueba, se mantienen y explicitan algunas cuestiones que están ya en la regulación vigente pero que, con frecuencia, son poco o mal aplicadas en la práctica de los tribunales.

a) como el valor probatorio de las declaraciones de los esposos, principales concedores de los hechos de su matrimonio, que puede tener fuerza de prueba plena solo si, valorando todos los indicios y adminículos, consta la credibilidad de las partes (c.1678,1, en línea con lo dispuesto en el ex.c.1679), c. 1536.

b) La fuerza probatoria plena de un solo testigo cualificado, que deponga sobre lo realizado en virtud de su oficio o que presente todas las garantías, sin necesidad de reiterar innecesariamente los testimonios, con lo que esto supone de tardanza y de complicación para las partes y para el mismo tribunal (c.1678,2, que reitera lo previsto en el c.1573, aún vigente).

j) El derecho de los abogados, en orden a una mejor defensa de las partes, a estar presente en las declaraciones de partes y testigos y a examinar los documentos y conocer los autos incluso antes de su publicación (c.1677, recogiendo lo dispuesto en el v.c.1678).

k) La determinación de los requisitos para que el juez pueda alcanzar la certeza moral necesaria para declarar la nulidad del matrimonio (Ratio procedendi, art. 12, que recoge lo establecido en el art. 247,2 de la Dignitas Connubii).

l) Respecto a la ejecución de las sentencias declarativas de la nulidad, los dos párrafos del c.1682 recogen lo dispuesto en anteriormente en los cánones 1684,1 y 1685 del Código de 1983, destacando la necesidad de inscribir con toda rapidez la declaración de nulidad del matrimonio, una vez sea ejecutiva, en los libros parroquiales de matrimonio y en las partidas de bautismo de los esposos, así como también el veto que haya podido imponerse en su caso.

m) Tampoco se modifican las normas generales, limitándose el motu proprio a recoger, en los tres párrafos del nuevo c.1691, lo anteriormente dispuesto en el v.c.1689 (respecto a la exigencia de que la sentencia amoneste a las partes sobre las obligaciones morales e incluso civiles que tienen respecto a la prole y la otra parte), en el v.c.1690 (sobre la imposibilidad de tramitar las causas de nulidad por el proceso oral), o en el v.c.1691 (sobre el carácter subsidiario de la normativa procesal general y del proceso contencioso ordinario en estos procesos matrimoniales), permaneciendo esta regulación básicamente igual.

#### 4. PRINCIPALES NOVEDADES DE LA REFORMA PROCESAL

4.1. MODIFICACIÓN DE LOS FUEROS DE COMPETENCIA Frente a la regulación de los fueros de competencia que hacía el v.c.1673, el nuevo c.1672 fija con toda amplitud tres fueros igualmente competentes, sin que ninguno de ellos esté supeditado a ulteriores requisitos . El fuero de las pruebas se ve notablemente redimensionado, al no estar ya condicionado a que preste su consentimiento el Vicario judicial del domicilio del demandado, previa audiencia de éste, lo cual facilitará y agilizará la adquisición de este fuero. El fuero del actor, al haberse admitido con toda amplitud y sin ningún requisito adicional tanto el domicilio como el cuasidomicilio de éste. Comparando con la regulación anterior, en que el fuero del domicilio –nunca cuasidomicilio– del actor sólo podía admitirse si ambas partes tenían su domicilio en el territorio de la misma Conferencia Episcopal y con el consentimiento expreso del Vicario Judicial del domicilio de la parte demandada, habiendo oído a ésta, lo cual resulta especialmente relevante dado que un número elevado de causas de nulidad se tramitan en ausencia del cónyuge demandado.

4.2. NOVEDADES RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LOS TRIBUNALES Se modifica profundamente la constitución y composición de los tribunales eclesiásticos que deben conocer estos procesos de nulidad matrimonial, siendo significativa la nueva redacción dada al c.1673.

4.2.1. Reforzamiento del papel del Obispo como juez nato de la diócesis. Por un lado, hay un evidente reforzamiento del papel del Obispo como primer Juez de la diócesis: así, si bien la alusión del c.1673,1 a la posibilidad de que el Obispo diocesano puede ejercer su potestad judicial personalmente o por medio de otros, con arreglo al derecho, no constituye novedad ninguna, reproduciendo este párrafo lo dispuesto en el v.c.1419,1, sí resulta una novedad sustancial en que el mismo motu proprio reserve expresamente al Obispo –no a su tribunal– la competencia para la resolución de los procesos abreviados, dado que se trata de nulidades especialmente evidentes (c.1683). Este ejercicio personal de la potestad de juzgar por parte del Obispo viene asimismo desarrollado en el art. 20 de la Ratio procedendi, al insistir en la obligación del Obispo de firmar en todo caso la sentencia, lo que parece excluir la posibilidad de delegación de esta función.

Si bien, se mantiene la obligación del Obispo de constituir en la diócesis un tribunal para conocer de estas causas (c.1673,2), tal como ya recogían los cc.1420-1423. En este sentido, la redacción de este párrafo 2º del c.1673, al disponer que «el Obispo constituirá en su diócesis el tribunal diocesano para las causas de nulidad del matrimonio, sin perjuicio de la facultad que le asiste de acceder a otro tribunal diocesano o interdiocesano limítrofe» la nueva redacción dada al párrafo 2º excluye, la necesidad de esa prórroga de competencia a la Signatura Apostólica.

4.2.2. El Vicario judicial y la fase introductoria del proceso. Notable reforzamiento del papel del Vicario judicial, al que se atribuyen nuevas competencias –alguna de ella muy delicada– en el desarrollo del proceso y, de modo muy especial, en su fase introductoria. La nueva regulación concede un amplio campo de actuación al Vicario Judicial en dos momentos concretos de la fase introductoria:

-Admisión de la demanda A tenor del c.1676,1, la admisión de la demanda queda reservada al Vicario judicial;

-Fijación del dubium y determinación del proceso por el que debe sustanciarse la demanda de nulidad. A tenor de la reforma, corresponde al Vicario judicial, una vez oído el defensor del vínculo y la parte demandada, establecer la fórmula de dudas y determinar si la causa debe tramitarse mediante proceso ordinario o mediante proceso abreviado (c.1676,2; Ratio procedendi, art. 15).

- Constitución del Tribunal. Tras la determinación del dubium y del proceso a seguir cuando el Vicario designe el tribunal –colegial o juez único– que conocerá de la causa en proceso ordinario (c.1676,3) o al instructor y al asesor para la instrucción del proceso abreviado (c.1676,4). Se introduce una novedad significativa respecto a la regulación hasta ahora vigente y la praxis judicial, en que la constitución del tribunal es la primera actuación del Vicario judicial nada más presentar la demanda la parte actora (art. 118 Dignitas Connubii), siendo la admisión de la demanda ya competencia del juez presidente de ese tribunal previamente constituido

4.2.3. Desaparición de las limitaciones al nombramiento de jueces laicos Asimismo, la norma modifica la ley precedente y permite la participación ordinaria de jueces laicos, sin las excesivas limitaciones previstas en el Código actual: así, mientras el c.1421 supedita la posible designación de los laicos como jueces al permiso previo de la Conferencia Episcopal y a una situación de necesidad, limitando en cualquier caso su participación en el proceso a ser uno de los tres miembros del tribunal colegiado, el renovado c.1673,3 parte de la aceptación de jueces laicos en plano de igualdad con clérigos, admitiendo sin condiciones que los jueces laicos puedan ser mayoría en el tribunal colegial. La potestad judicial no requiere de suyo la potestad de orden, por lo que no se ven obstáculos de peso a que se permita el nombramiento de laicos como jueces, ni siquiera en los supuestos de juez único.

4.2.4. ¿Tribunal colegiado o juez único? La nueva regulación de las causas matrimoniales hecha por el m.p. Mitis Iudex mantiene básicamente –si bien con algún matiz– la regulación codicial en esta cuestión. Así, el c.1673,3 establece con claridad que «las causas de nulidad están reservadas a tribunales colegiados» en primera instancia. Sólo en el caso de «que no sea posible constituir el tribunal colegial», prevé el c.1673,4, en línea con el c.1425,4, que podrá el Obispo encomendar la causa a un juez único, necesariamente clérigo. A mi juicio, la expresa reserva que el c.1673,3 hace de las causas de nulidad a tribunal colegiado exige una interpretación estricta de la situación de necesidad (de la imposibilidad de constituir el tribunal) para atribuir la causa a juez único.

Por otro lado, el tribunal de segunda instancia deberá ser siempre colegiado, exigencia ésta que obliga para la validez; así lo dispone el c.1673,5, que reitera lo dispuesto en el c.1441, si bien añadiendo expresamente que se trata de un requisito ad validitatem.

4.2.5. Suspensión de la causa en caso de duda sobre la no consumación del matrimonio. También se ha introducido alguna modificación significativa en la regulación del supuesto de suspensión de

la causa de nulidad y solicitud de la dispensa *super rato*, en aquellos casos en que de la instrucción de la causa surja una duda muy probable de que el matrimonio no ha sido consumado. Aunque respetando en líneas generales el marco anterior, el nuevo c.1678,4 –que sustituye al v.c.1681– parece acentuar la iniciativa y decisión del juez en el tránsito de la vía judicial a la vía administrativa. Mientras que en el v.c.1681 esta posibilidad de cambio de procedimiento venía condicionada a que ambas partes presten su consentimiento a la suspensión de la causa de nulidad, la nueva regulación parece conceder mayor capacidad de disposición al tribunal en este tránsito de la nulidad a la disolución, al exigir únicamente la audiencia de las partes –no su consentimiento– para suspender la causa de nulidad, si bien continúa siendo necesario, como no puede ser menos, la petición expresa de uno o ambos cónyuges para poder solicitar la disolución pontificia.

4.2.6. Supresión de la exigencia de duplex conformis Una de las novedades más significativas de la reforma, que busca directamente la agilización de los procesos de nulidad, viene constituida por la supresión, en el c.1679, de la exigencia de dos sentencias conformes, dictadas por tribunales de distinto grado, para considerar firme y ejecutiva la declaración de nulidad. La supresión de la exigencia de duplex conformis para las sentencias declarativas de la nulidad supone un retorno de estas causas al régimen común que rige para todos los procesos canónicos, según el cual una sola sentencia que ninguna de las partes –ni los cónyuges ni el defensor del vínculo o el promotor de justicia– apele adquirirá firmeza, pudiendo las partes contraer nuevo matrimonio o regularizar su situación matrimonial. El legislador, en una especie de disposiciones finales incluidas justo antes de la rúbrica del documento, fija con precisión esta cuestión, al establecer que «la disposición del c.1679 se aplicará a las sentencias declarativas de la nulidad del matrimonio publicadas a partir del día en que este Motu proprio entre en vigor».

## II.- CONVERSIÓN DE LAS ESTRUCTURAS PASTORALES-FAMILIARES Y JURÍDICO-PROCESALES.

El contexto remoto de la reforma del proceso de nulidad lo encontramos en la Exhortación apostólica *Evangelii Gaudium* del 24 noviembre de 2013. Con ella Francisco, en su primer año de pontificado, quiere inaugurar en la Iglesia una nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría del Evangelio y por los nuevos caminos de evangelización para la Iglesia en los próximos años (EG1). Sostiene que la Iglesia, que responde en sus orígenes al mandato del Señor, ha de ser una Iglesia “en salida” (EG 20-24), que no se limita al “simple administrar” lo que ya tiene (EG 25), venciendo la tentación del inmovilismo, porque la Iglesia es “casa abierta del Padre” (EG 47), no una “aduana” de hombres que controlan y e impiden entrar (EG 47-49), que se involucra en una “pastoral en conversión” (EG 25-39), en donde la dimensión pastoral y jurídica se coordinan, no se contraponen, porque ambas están orientadas a la realización de la misión de la Iglesia; el servicio a la verdad en la justicia, tiene, en efecto, una connotación profundamente pastoral: la edificación de la comunidad cristiana .

En su discurso a la Rota del 2015, Francisco afirmaba su deseo: «quiero exhortaros a un mayor y apasionado compromiso en vuestro ministerio, como garantía de unidad de la jurisprudencia en la Iglesia. ¡Cuánto trabajo pastoral por el bien de tantas parejas y de tantos hijos, a menudo víctimas de estas situaciones! También aquí se necesita una conversión pastoral de las estructuras

eclesiásticas (cfr. *ibid.*, n. 27)». Actividad judicial que pertenece directa y esencialmente a la acción pastoral de la Iglesia y a su misión evangelizadora.

La efectiva aplicación de MIDI requiere la creación y puesta en marcha de un servicio pastoral. En relación a este servicio jurídico-pastoral el Proemio indica algunos supuestos a considerar en su ejecución: “alimenta este impulso reformador el enorme número de fieles que, aun deseando proveer a su propia conciencia, con demasiada frecuencia quedan apartados de las estructuras jurídicas de la Iglesia debido a la distancia física o moral”. Se hace necesario, entonces, una “conversión” de los operadores de justicia y de las estructuras eclesiásticas, muchas veces experimentadas lejanas y poco empáticas y poco prolijas en sus competencias matrimonial-jurídicas .

Esta conversión implicará en concreto un modo nuevo de administrar la justicia en el ámbito de la pastoral familiar. Pero no sólo. La conversión de las estructuras jurídico-pastorales pasa sobre todo por poner a la familia en el centro de la pastoral de la Iglesia, e incorporar en esta pastoral familiar una serie de criterios-principios renovados, también desde un punto de vista jurídico, “...como un compromiso de vida apostólica, requiere que se ejerza teniendo la mirada fija en la imagen del Buen Pastor, que se inclina hacia la oveja extraviada y herida” .

#### 1.- El Servicio Jurídico-Pastoral.

La experiencia del fracaso matrimonial es siempre dolorosa . Este mismo fracaso, por otro lado, puede convertirse en una oportunidad para la reflexión y la renovación. Al centro de la reforma del proceso matrimonial encontramos la preocupación de los pastores y el servicio misericordioso hacia los fieles que han fracasado en su matrimonio.

Como afirma la Relación Final del Sínodo Ordinario de la Familia, n. 82 «Será, por tanto, necesario poner a disposición de las personas separadas o de las parejas en crisis, un servicio de información, de consejo, de mediación, ligado a la pastoral familiar, que podrá también acoger a las personas de cara a la investigación previa al proceso matrimonial (cfr. arts. 2-3)». Este servicio jurídico pastoral está constituido por una instancia eclesiástica para matrimonios en crisis o personas separadas.

A) «Información». El art. 2 habla de una investigación prejudicial o pastoral, realizada por estructuras estables, diocesana o parroquiales, constituidas por personas consideradas idóneas, dotadas de competencias no sólo exclusivamente jurídico-canónicas. La finalidad de este servicio pastoral, que facilita el acceso a los tribunales eclesiásticos es la orientar a conocer la condición de los fieles que dudan de la validez de su matrimonio fracasado y a recoger elementos útiles para la eventual celebración del proceso judicial. De modo que los fieles tengan noticia y conocimiento fundados de la realidad de los procesos de nulidad, de su naturaleza declarativa, de las condiciones de acceso a los mismos. Es decir, son estructuras que pertenecen al ámbito de la pastoral matrimonial, cuya finalidad es la de facilitar el acceso a este servicio y el uso del mismo, lo que comportará multiplicar, no los matrimonios nulos, pero sí los procesos de nulidad.



B) «Acompañamiento». Expresamente se menciona en el Proemio que: «la caridad y la misericordia exigen, por tanto, que la propia Iglesia, como madre, se acerque a estos hijos suyos que se consideran separados de ella»; este «acompañamiento jurídico del otro» debe hacerse en los diversos niveles de la pastoral familiar y por distintos agentes, también en los tribunales eclesiásticos. El verdadero acompañamiento debe buscar la verdad, (EG170); traducido al ámbito del proceso de nulidad, el verdadero «acompañamiento» comporta, además de otras actitudes, el rechazo de las nulidades «en conciencia», el respeto del favor matrimonii (can. 1060), el reconocimiento de la naturaleza declarativa del proceso, la reafirmación de la necesaria certeza moral al momento de sentenciar (art. 12 RP).

C) «Coordinación» Este acompañamiento exige coordinación entre los distintos agentes involucrados y niveles de la pastoral familiar, de modo que se verifique una presencia real-efectiva de los expertos en las disciplinas jurídico-matrimoniales y de quienes ejercen la actividad judicial en la Iglesia. Para que todo ello se pueda concretar, además de trabajar en la planificación de la pastoral familiar, –fundamentalmente a nivel diocesano, pero también a otros niveles–, habrá que atender a la formación y preparación de personal suficiente y competente, personas idóneas que puedan participar en estos servicios de información, acompañamiento, que podrán muy bien ser encomendados tanto a clérigos como a laicos, enviados de manera prioritaria a este servicio eclesial. Tal planteamiento es manifestación de la necesaria conversión que auspicia MIDI entre la pastoral familiar general y la actividad judicial matrimonial. Conversión que implica la coordinación «...entre la acción de la Iglesia que evangeliza y la acción de la Iglesia que administra la justicia».

## 2.- Los desafíos procesales de los criterios guía

¿Qué elementos ha considerado el Papa al momento de modificar el proceso de declaración de nulidad matrimonial? Juan Pablo II se refirió al Concilio Vaticano II como el contexto necesario para interpretar las disposiciones de los códigos canónicos. Del mismo modo, no es fuera de lugar referirse a la experiencia sinodal como contexto de las nuevas normas de procedimiento.

Por un lado, las dos asambleas sinodales de los Obispos, la del año 2014 y la del año 2015, dieron cuenta de una realidad muy precaria de la administración de justicia en la iglesia: existe un gran número de fieles que viven en situación irregular, quienes se han alejado de la Iglesia o práctica religiosa al no sentirse atendidos, ni acogidos, ni ayudados en su situación personal. Por otro, se hacía urgente reformar el sistema procesal matrimonial porque el actual sistema no estaba dando la respuesta adecuada a los fieles que recurrían a los tribunales eclesiásticos, considerados estructuras alejadas no sólo de los fieles sino, también ajena de la estructura pastoral de la misma iglesia: la lentitud de los procesos irritan y cansan.

Esta reforma, que coloca la búsqueda de la verdad y la defensa de la indisolubilidad en el centro de la actividad judicial, no es solo una simplificación y agilización del procedimiento a seguir, sino

también, lo que es más importante, una revisión de los criterios y actitudes de la administración de justicia eclesiástica .

El Proemio, después de reivindicar que el ejercicio de la potestad judicial es una potestad eclesiástica encomendada por Cristo a Pedro y sus sucesores, presenta en ocho números los principios que guían esta reforma procesal matrimonial, considerada una adecuación de la *salus animarum* a la realidad de muchos fieles y un reconocimiento y defensa de la propiedad de la indisolubilidad del matrimonio. Con estos criterios la normativa de la nueva ley debería ser correctamente interpretada, comprendida y aplicada. Inspiran estos principios la justicia y la misericordia sobre la verdad del vínculo matrimonial de quienes han experimentado el fracaso matrimonial. En este contexto se inserta el MIDI:

“Las leyes que ahora entran en vigor quieren mostrar la cercanía de la Iglesia a las familias heridas, con el deseo que a la multitud de los que viven el drama del fracaso conyugal llegue la obra sanadora de Cristo a través de las estructuras eclesiales con la esperanza de que se descubran nuevos misioneros de la misericordia de Dios para con los otros hermanos, en beneficio de la institución familiar” .

Estos criterios son de hecho la guía más segura para el examen y la interpretación del texto en su conjunto, que quiere “mostrar la cercanía de la Iglesia a las familias heridas” , y que tiene un objetivo eminentemente pastoral: mostrar la solicitud de la Iglesia hacia los fieles que esperan una rápida verificación de su situación matrimonial .

Veamos cuáles son y qué significan estos criterios guías, de naturaleza pastoral, jurídica y teológica, que nosotros analizaremos no individualmente sino de manera relacionada e integrada y que pueden resumirse en los siguientes títulos :

A.- No se innova ni en la naturaleza judicial ni declarativa del proceso de nulidad matrimonial (no es un proceso constitutivo de la nulidad) ni en la doctrina (no se han introducido nuevos capítulos de nulidad):

A.1.- ¿Nuevo tipo de proceso de nulidad matrimonial? El mayor reto al que estamos llamados todos los operadores jurídicos en la Iglesia es buscar la verdad del vínculo conyugal y proteger y defender su indisolubilidad. En diversos medios de comunicación social, subrayando la dimensión pastoral que subyace a la base de esta reforma, se la ha presentado como conteniente un proceso de refundación teológica-canónica de la nulidad del matrimonio. Para algunos, incluso, habría introducido el "divorcio" católico. Veamos qué tan verdadera o no es esta afirmación.

No hay duda de que el MIDI protege “[...] la verdad del sagrado vínculo conyugal” y en lo mismo, su indisolubilidad. Lo indica expresamente en el Proemio: “con el transcurrir de los siglos, la Iglesia, en materia matrimonial, adquiriendo conciencia más clara de las palabras de Cristo, ha comprendido y expuesto más profundamente la doctrina sobre la indisolubilidad del vínculo del matrimonio, ha elaborado el sistema de la nulidad del consentimiento matrimonial y ha disciplinado más adecuadamente el proceso judicial sobre dicha materia, todo ello de acuerdo con la verdad de fe profesada [...] Consciente de ello, establecí que se iniciara la reforma de los procesos de nulidad del matrimonio [...] salvando siempre el principio de la indisolubilidad del vínculo matrimonial”.

La reforma confirma como única vía de aproximación a los fracasos matrimoniales, que incluye la revisión de la validez del vínculo, la estrictamente judicial. Se puede sostener que esta es una opción normativa con efectos hermenéuticos importantes para cualquier otra disposición de MIDI. El Proemio, considerando el principio de la seguridad jurídica, afirma que las causas de nulidad serán tratadas por vía judicial, y no administrativa, y dentro de la vía judicial se mantiene el proceso ordinario como "el proceso tipo" para este tipo de causas . Efectivamente MIDI reconoce tres procesos de naturaleza judicial para el estudio de la validez de un matrimonio: el ordinario, el más breve y el documental . Cada uno de ellos de naturaleza declarativa de la nulidad, no constitutiva de la misma. Por lo que, tanto en el proceso más breve, que se considera una excepción , como en el documental, o se alcanza la certeza moral necesaria de la nulidad y se resuelve por la nulidad del matrimonio, o en caso contrario, se remite la causa al proceso ordinario (can. 1687). Certeza moral acerca la *quæstio facti* del caso. Entonces, si bien se reconoce la existencia de tres tipos de procesos por los cuales se puede estudiar un matrimonio que ha fracasado, se ha optado por un proceso de naturaleza judicial, en vista a proteger la indisolubilidad matrimonial y el derecho de los fieles a un juicio justo y al recto ejercicio y respeto del derecho de defensa. En línea con el magisterio pontificio esta elección, "[...], lo exige la necesidad de tutelar en el máximo grado la verdad del vínculo sagrado: y eso se asegura precisamente con las garantías del orden judicial".

La reforma al proceso canónico de declaración de la nulidad matrimonial, insistimos, deja firme la doctrina de la indisolubilidad del vínculo matrimonial. La iniciativa pontificia no pretende subvertir la inviolabilidad dogmática de la indisolubilidad, piedra angular del vínculo matrimonial, ni afectar las normas sustantivas de la invalidez del consentimiento matrimonial. Solo aspira a que la disciplina eclesiástica sea eficientemente aplicada, esté cerca de los fieles que han visto fracasado su proyecto matrimonial y sea más coherente con la verdad de la fe que se profesa: cuando el matrimonio es un verdadero matrimonio, es indisoluble; pero cuando esa realidad no es un matrimonio no hay nada indisoluble. El matrimonio es indisoluble cuando es sacramento, y esto la Iglesia no lo puede cambiar . El procedimiento judicial que se realiza en cada uno de los tres procesos contenidos en MIDI, justamente es una opción procesal por la cual el Papa quiere garantizar la defensa de ésta verdad de fe, con lo que cierra definitivamente la puerta a la entrada hipotética del divorcio en la Iglesia y al laxismo al momento de fallar estos procesos judiciales de nulidad matrimonial .

Respondiendo a nuestra anterior pregunta, nadie puede dudar que, en el terreno de los principios, la búsqueda de la verdad y la protección de la indisolubilidad estén en la intentio y en la ratio del MIDI. Otra cuestión es si el modo como se han regulado determinadas instituciones procesales en este documento es el más idóneo para la consecución de esa finalidad.

A.2.- ¿Nuevas causales de nulidad matrimonial? Las "circunstancias" señaladas en el art. 14 §1, que pueden permitir tratar la causa de nulidad del matrimonio a través del proceso más breve según los cánones 1683-1687, han sido consideradas por muchos, nuevas causales de nulidad y con igual valor jurídico. Nos preguntamos, ¿tienen todas estas circunstancias el mismo valor jurídico o naturaleza procesal? Para nosotros no. Lo explico.

El art.14, en línea con la hermenéutica de continuidad y a la luz del can. 6 §2, señala a modo ejemplificativo, circunstancias que pueden permitir tratar la causa de nulidad del matrimonio a través del proceso brevior, pero no señala circunstancias que por sí solas son invalidantes del matrimonio en cuestión. Sostenemos que las mismas no indican nuevas causales de nulidad. Son

situaciones, hechos y condiciones, que si bien pueden ser relevantes para probar lo alegado en el libelo, no son circunstancias constitutivas en sí mismas de plena prueba o certeza moral suficiente para declarar la nulidad matrimonial. Son “argumentos particularmente evidentes”, son elementos sintomáticos de invalidez del consentimiento matrimonial que sostienen la petición de nulidad, según la jurisprudencia de la Rota Romana y poseen naturaleza heterogénea según sea la circunstancia de que se trate que pueden ser fácilmente comprobadas. No causales de nulidad matrimonial

Para interpretar correctamente el art.14, que señala estos elementos indicativos, en línea con la tradición jurídica, se deben distinguir:

a) Las circunstancias ya reconocidas, asumidas y aceptadas por la jurisprudencia de la Rota Romana y la práctica de los Tribunales, como causas de nulidad matrimonial (matrimonio celebrado por causa extraña al matrimonio, violencia física, falta de uso de razón comprobada, obstinada permanencia en relación extraconyugal (simulación parcial), ocultamiento doloso de la esterilidad (can.1098: error doloso), ocultamiento doloso grave enfermedad, hijos precedentes relaciones, encarcelaciones (error doloso));

b) De las meras circunstancias que pueden ayudar en la admisión de la causa al proceso brevior, pero que por sí solas no pueden ser suficientes para declarar la nulidad matrimonial porque no tienen por sí solas un valor jurídico preciso pro nullitatis (embarazo, falta de fe, brevedad de la convivencia matrimonial, aborto procurado para impedir la procreación).

Entonces, si estamos a la mente del legislador podemos sin duda afirmar que la reforma procesal en cuestión se coloca dentro de la disciplina eclesiástica y de la reglamentación dogmática del matrimonio y no pretende abordar ni la indisolubilidad del matrimonio ni modificar ni establecer un nuevo régimen de invalidez del consentimiento matrimonial ni nuevas causales de nulidad.

B.- La preocupación por procesos simples, accesibles, diligentes y ágiles. Uno de los grandes retos de la reforma es contribuir a que, de manera efectiva, la tramitación de los procesos de nulidad responda a criterios de simplicidad, diligencia y celeridad . Dos son los principios que orientan hoy en día la administración de justicia matrimonial: la pastoralidad y la caridad.

Lo que propone Francisco es corregir algunas actitudes que se advierten en la praxis de determinados tribunales: lentitud administrativa para ingresar expediente, retrasos en la instrucción, mala preparación de la misma, interrogatorios hechos a base de generalidades que no toman en consideración la vicisitudes del matrimonio en concreto, preguntas «teledirigidas» o cuestionarios dados a conocer previamente, preguntas capciosas, sugerentes, interrogatorios realizados por personas «delegadas» poco idóneas, transcripciones que son más bien interpretaciones o traducciones de quien toma la declaración.

La intención del legislador ha sido justamente corregir los desajustes judiciales existentes en la Iglesia y configurar un procedimiento que, protegiendo la indisolubilidad y la verdad del vínculo conyugal, responda también a los criterios de celeridad-diligencia y simplicidad . La intención del legislador no ha sido favorecer ni facilitar la nulidad matrimonial misma: agilidad y rapidez procesal, no significa ni debe significar facilitación ni descuido procesal . Más que antes, es necesario, reconducir el obrar forense a criterios deontológicos adecuados, a criterios de «buen obrar»: priorizar la búsqueda de la verdad y proteger la indisolubilidad como criterios claves de la dinámica

procesal; buscar la justicia en el caso concreto; actuar respetando la ley sustantiva y la jurisprudencia matrimonial; actuar según ciencia y conciencia, con criterios de profesionalidad y laboriosidad, respetando la dignidad-lealtad profesional, con probidad moral y honestidad de vida, con independencia y libertad —y en el caso de los jueces especialmente con imparcialidad—, con diligencia y celeridad, con discreción y reserva, en última instancia, viviendo el quehacer jurídico como un ministerio eclesial, como una verdadera vocación al servicio de los fieles y de Dios, en cuyo nombre actuamos al dictar sentencia.

Una justicia retardada es una justicia denegada, como se concluye de la lectura de los cann. 212-213 y 221. La celeridad del proceso es una exigencia no sólo jurídica sino también moral, que manifiesta la preocupación por las dimensiones pastoral, jurídica y económica de los procesos. Haciéndose cargo de una propuesta del Sínodo de los Obispos, el Papa establece, de hecho, procesos judiciales más rápidos y accesibles lo cual no debe ir en detrimento de la búsqueda seria de la verdad, ni debe poner en duda la certeza del derecho ni perjudicar los derechos procesales de las partes.

MIDI contienen disposiciones que favorecen, no la facilitación en la declaración de nulidad matrimonial, sino la celeridad de los procesos y la adecuada simplificación procesal, de modo de evitar que, a causa de un retraso injustificado e injusto en la definición del dubio planteado en sede judicial, el corazón de los fieles que esperan la clarificación del propio estado no quede largamente oprimido por las tinieblas de la duda.

Quedará a la práctica misma y a la doctrina profundizar el ejercicio de estos cánones para que se asegure siempre la calidad y la profesionalidad en el estudio jurídico del matrimonio acusado de nulidad. La agilidad procesal, insistiendo en la naturaleza declarativa de los procesos de nulidad y en la necesidad de certeza moral en los términos del art. 12 de la Ratio Procedendi que todos conocemos, no debe significar desidia o irresponsabilidad en el desarrollo del proceso de nulidad matrimonial.

Este propósito de agilizar y dar celeridad que persigue el motu proprio encuentra traducción en diversas disposiciones concretas, por medio de las cuales se integran en la pastoral familiar varias instituciones procesales. A título meramente indicativo me permito referir las siguientes:

- La creación de una fase previa de investigación “prejudicial o pastoral”, la cual puede resultar ciertamente una ayuda para las partes y al tribunal porque se encontraría con un expediente judicial mejor preparado (art.2). la investigación pastoral concluye con la redacción de la petición y/o escrito de demanda si fuera el caso (arts. 3-5)

- La modificación de los títulos de competencia en los términos del can. 1672, 2º, en concreto, sobre la base del «domicilio o cuasidomicilio de una o ambas partes» (arts. 7 §§1-2 y 8 §§1-2. El can. 1672 fija con toda amplitud tres fueros igualmente competentes, sin que ninguno de ellos esté supeditado a ulteriores requisitos. La reforma elimina las condiciones de acceso al foro de la prueba (ex can. 1673,4º) y al foro del actor (ex can. 1673,3º), sea de su domicilio sin las restricciones de que coincidiera con el domicilio de la parte convenida y que este fuera el de la misma Conferencia Episcopal y con el consentimiento expreso del vicario judicial habiendo escuchado a la parte convenida; sea el de su cuasidomicilio. En efecto, a la luz de la cercanía y mayor accesibilidad de los Tribunales, para establecer hoy la competencia de los mismos a los fines de tramitar un proceso

matrimonial de nulidad, bastará con adquirir un cuasidomicilio dentro del término de la jurisdicción del Tribunal del que se trate (can. 102 §2).

- La Constitución y composición de los tribunales se modifican profundamente:

a) La participación de los laicos como jueces: desaparecen las restricciones y limitaciones para el nombramiento de jueces laicos. La norma del can.1673 §3 supera las limitaciones del can. 1421 §2, de modo que ya no se requiere para proceder a nombrar a un juez laico ni que se verifique una situación de necesidad, ni tampoco el permiso de la Conferencia Episcopal. Hoy están en plano de igualdad con los jueces clérigos.

b) La posibilidad de constituir un tribunal por un juez único (can. 1673 §4). Si no es posible constituir un tribunal colegial (can. 1673 §3), que es la norma general y ordinaria, se permite que el obispo pueda encomendar la causa a un juez único, que ha de ser clérigo, para lo cual hoy en día no es necesario el permiso de la conferencia episcopal (can. 1425 §4). Al ser una excepción a la norma, estimo que esto exige una interpretación estricta de la situación de imposibilidad.

c) La necesidad de constituir el tribunal en la diócesis (can. 1673 §2), y en caso de no existir, la obligación del obispo de procurar la formación de personas que puedan desempeñar este servicio en el tribunal que habría de constituirse (art. 8 §1), y la posibilidad también de acceder a otro tribunal diocesano o interdiocesano cercano, todo ello sin necesidad de ulteriores autorizaciones por parte de la Signatura Apostólica.

- Reforzamiento de las competencias del Vicario Judicial.

a) Admisión de la Demanda. Can, 1676,1: parece quedar reservada exclusivamente a él.

b) Fijación del dubio y determinación del proceso. Can. 1676,2: corresponde al Vicario, una vez oído el defensor del vínculo y la parte demandada, establecer la fórmula de dudas y determinar si la causa debe tramitarse mediante proceso ordinario o mediante proceso abreviado (art. 15). ¿Es recurrible este decreto en caso de proceso brevior? ¿Debe ser aceptado por el obispo?

c) Constitución del Tribunal. Can. 1676,3-4. Determinado el dubio y el tipo de proceso de tramitación, es decir, concluida la fase introductoria, el Vicario nombra el tribunal, colegial o unipersonal, para la tramitación del proceso ordinario, o al instructor y al asesor, en caso que corresponda el proceso más breve.

- En el contexto del mayor reforzamiento del papel del Obispo como primer Juez de la diócesis, se establece una importante novedad: La posibilidad de activar el proceso más breve ante el obispo, proceso que ciertamente se desarrollará de modo más ágil y con un desarrollo temporal más breve, si se verifican en el caso los requisitos del can. 1683 (art.20). El vicario judicial podrá decretar que se active el proceso brevior ante el obispo, el cual, en la medida en que se desarrollará en una única sesión instructoria (siempre que ello sea posible, can. 1686) a celebrar en el plazo de treinta días desde el dubium (can. 1685), y en la medida en que suprime el decreto de publicación de actas, la fase de deducciones y la conclusión de la causa, pasándose directamente a la discusión de la causa, para lo que se tiene el plazo máximo de quince días.

- Suspensión de la causa en caso de duda de no consumación. Can.1678, 4: iniciativa y decisión del juez para la suspensión de la causa de nulidad y para el tránsito de la vía judicial a la vía

administrativa de solicitud de la dispensa súper rato en caso de duda muy probable de que el matrimonio no ha sido consumado. El ex can. 1681 exigía que ambas partes manifestaran su consentimiento hoy solo se exige al juez únicamente “oír a las partes” .

- Evaluación de las pruebas. Las declaraciones y confesiones judiciales de las partes pueden adquirir valor de plena prueba (can. 1678,1). La deposición de un solo testigo cualificado puede adquirir valor de plena prueba (can. 1678,2). Se puede obviar la pericia psicológica su dadas las circunstancias del caso aparece evidentemente inútil (can. 1678,3).

- Supresión de la exigencia de la doble sentencia conforme. Una sola sentencia en favor de la nulidad es ejecutiva. La mayor novedad que ha introducido la reforma del proceso de nulidad matrimonial es la abolición de la doble sentencia conforme . Afirma el Papa en el primer criterio guía, que ha parecido oportuno no exigir más “una doble decisión conforme a favor de la nulidad del matrimonio, para que las partes sean admitidas a nuevo matrimonio canónico, sino que sea suficiente la certeza moral alcanzada por el primer juez, a norma del derecho”. Es decir, se ha abrogado la obligación de la doble sentencia conforme a favor de la nulidad del matrimonio para poder celebrar otro nuevo, dando fuerza ejecutiva a la sentencia de primer grado (can.1679). La primera sentencia de nulidad del matrimonio deviene ejecutiva sino hay apelación en el plazo previsto (can. 1680).

- Reconocimiento y nueva regulación del recurso de apelación. La tramitación y decisión de este recurso en la reforma ha adquirido la naturaleza de contrapeso a la abolición de la exigencia de la doble sentencia conforme. Este recurso no es un deber impuesto por la ley, como se establecía en el ex can. 1682, sino un derecho sancionado en la parte legislativa del MIDI, de quien se considere perjudicado por la sentencia declarativa de nulidad, cann. 1679-1680. Acerca del mismo debemos clarificar, para no generar confusiones innecesarias en relación a lo establecido en el MIDI. Afirma el nuevo can.1679, que “la sentencia que por primera vez ha declarado la nulidad del matrimonio (cualquiera sea la instancia), cumplidos los términos establecidos en los cánones 1630-1633 (para presentar el recurso de apelación) se hace ejecutiva”. La nueva regulación deja a salvo muy expresamente en el nuevo canon 1680 §1 el derecho de las partes de formular los recursos procedentes, y desde luego el de apelar. No es exacto afirmar, como algunos han pretendido, que se haya abolido o prohibido de modo absoluto la posibilidad de apelar o la necesidad de la “doble sentencia conforme”, sino que hay una nueva regulación del mismo en el pleno reconocimiento del derecho procesal de defensa. Hay una serie de nuevos cánones y toda la remisión que hace la MIDI a los cánones aún vigentes del CIC/83, que regulan la presentación, la prosecución, los requisitos y exigencias de admisibilidad, el tratamiento del recurso de apelación (cann. 1680-1682 e 1687; 1630-1635).

Lo que sí ha sido abrogado por MIDI de modo claro es la “obligación” o la “necesidad”, ipso iure o ex officio, de la apelación al tribunal de segunda instancia. La sentencia pro nullo no recurrida dentro del plazo establecido en el can. 1630-1633, se hace ejecutiva (can. 1679), lo que no quiere decir que se prohíbe toda posibilidad de apelación de la sentencia cuanto se estime justo hacerlo, sea esta afirmativa o negativa de la nulidad, si alguna de las partes se considera perjudicada por la misma sentencia (can. 1680 §1). No presentar la apelación dentro del plazo perentorio legal, equivale a renunciar al derecho que al titular del mismo la ley le otorga. Repetimos, permanece íntegro el derecho a apelar de los cónyuges y del promotor de justicia y del defensor del vínculo (can. 1680). Incluso se reafirma en el criterio de reforma VII la posibilidad de la apelación al Tribunal

ordinario de la Sede Apostólica, es decir a la Rota Romana (cann. 1680-1681). Hay una cuestión que deseo destacar. De acuerdo a la estructura del art.4 y del texto del can. 1679, que reconoce el derecho de apelación, en razón del principio de celeridad del proceso, MIDI regula solamente la apelación en contra una sentencia afirmativa de la nulidad (cann. 1681-1682), dejando la apelación de una sentencia negativa a la normativa general.

- Nueva proposición de la causa. La redacción del can. 1681 plantea algunas dudas. Señala el can., que "Si se ha pronunciado una sentencia ejecutiva". Con esta extraña o parcial redacción, suponemos que el canon se refiere solo a las sentencias declarativas de nulidad porque son estas las que pueden considerarse ejecutivas (can. 1679), omitiendo con esto cualquier referencia a sentencias negativas firmes, que también permitirían según la normativa general, la nueva proposición de la causa (can. 1644). Pero como el régimen general no ha cambiado, deben considerarse susceptibles de este recurso las sentencias tanto afirmativas como las negativas que hayan alcanzado firmeza.

Determinación del tribunal. "se puede recurrir en cualquier momento al tribunal de tercer grado para la nueva proposición de la causa". La expresa mención a este tribunal parece ser que impide aplicar el régimen general del can. 1644 (tribunal de apelación) que es el inmediatamente superior al que dictó sentencia. Esta determinación al tribunal de tercer grado, también va contra la mens legislatoris, puesto que el criterio general es el de favorecer la cercanía del fiel con los tribunales. Modificando en este caso el título de competencia del can. 1644, se alejaría del fiel el fuero competente, obligando a todos los fieles a recurrir a la Rota Romana lo que dificulta o impide el planteamiento de este recurso y por lo mismo se afectaría el ejercicio del derecho de defensa.

- La gratuidad del proceso. En este punto hay que distinguir entre la gratuidad del servicio prestado por la estructura judicial de la Iglesia (las tasas judiciales) y la gratuidad del servicio de abogados (honorarios). Más bien hay que hablar de cuidar "tanto como sea posible [...], salva la justa y digna retribución de los operadores de justicia, sea asegurada la gratuidad en el procedimiento [...]". Es la denominada gratuidad evangélica, es decir, causas tramitadas con el patrocinio ex officio, exceptuada la obligación moral para los fieles con recursos de entregar un donativo de justicia en favor de las causas de los pobres. La cuestión sobre la gratuidad puede afectar a la celeridad en la tramitación de los procesos, sobre todo en aquellos tribunales en los que supondría la supresión de todo el engorroso y largo trámite relativo al pago de las mismas. Personalmente, fundado en el derecho reconocido a todo fiel en el can. 221, preferiría que se dijera que nadie debe ser excluido por razones económicas de la posibilidad de introducir una causa de nulidad del matrimonio, si resulta que su petición tiene fundamento (can. 1676).